

16ª Sesión de próroga del 25 de Octubre de 1888

Presidencia del doctor Tagle

SUMARIO:—Asuntas entradas—Continúa la discusión pendiente sobre el dictámen de la comisión de legislación en el proyecto de ley, en revisión, estableciendo el matrimonio civil. (Se aprueba).

PRESENTES			
Presidente	En la capital de la República, á 25 de octubre de 1888, reunidos en su sala de sesiones los señores diputados inscriptos al margen, el señor presidente declara reabierta la sesión, á las 3 y 10 p. m.	Pino	que sustenta el comercio de exportación.
Albarracín		Posse	
Arias (F. R.)		Riquelme	Todas las medidas adoptadas desde 1886 hasta hoy responden al propósito de proteger y de impulsar las industrias nacionales para vigorizar el comercio interior y sostener el cambio internacional.
Balestra		Ruiz	
Barrasa		Sarmiento	
Basualdo		Soler	
Berdia		Sosa	
Bruchmann		Torres (Gmo.)	
Bustillo	ASUNTOS ENTRADOS	Torres (Greg.)	
Cabeza	—	Varela Ortiz	
Cáceres		Videla	
Campillo	COMUNICACIONES OFICIALES	Villagra	
Carbonell	—	Zeballos	
Castro	Buenos Aires, octubre 23 de 1888.	Zorrilla	
Civit			
Colombres	El poder ejecutivo tiene el honor de remitir al honorable congreso una solicitud de la sociedad Rural Argentina, y el proyecto de ley que tiene por objeto garantizar un interés sobre el capital empleado por empresas que elaboren y exporten carne bovina fresca, por cualquier procedimiento.	AUSENTES	
Dominguez (C.)		Con licencia	
Estrada			
Figuerola (M.-A.)		Alcorta	
Gallo		Avellaneda	
Gimenez		Mendoza	
Gonzalez		Ortiz	
Huidobro		Tejerina	
Lársen del Castaño		Prado	
Lopez		Rodriguez	
Lubary		Maciá	
Malbrán		Lagos	
Mallea		Espinosa	
Mansilla			
Molina		Con aviso	
Morán			
Olmedo		Bermejo	
Olmos		Bores	
Padilla		Dantas	
Parera		Lalanne	
Pellegrini		Obligado	

Octubre 25 de 1888

CÁMARA DE DIPUTADOS

16ª Sesión de próroga

Ocampo

Sin aviso

Alba Carreras

Arias (J. I.)

Augier

Bosch

Cano

Carballido

Centeno

Dominguez (J. A.)

Escalante

Fernandez

Garcia

Gonnet

Goyena

Laurencena

Luro

Meyer

Portela

Ramos Mejia

ma de gobierno y á la satisfaccion de necesidades vivamente sentidas.

Antes de decidirse el poder ejecutivo á remitir al honorable congreso la solicitud de la sociedad Rural Argentina y el proyecto de ley adjunto, formuló ciertas preguntas y observaciones que en copia se acompañan. La sociedad Rural las contestó en un informe minucioso, estableciendo los antecedentes y los hechos

con un criterio que el honorable congreso está también llamado á juzgar.

El poder ejecutivo no disimula que la concesion de garantías sobre el capital empleado en operaciones

comerciales y aleatorias ha de producir en la práctica dificultades serias; pero en vista de la importancia de la industria que trata de fomentarse, esos inconvenientes pueden ser obviados á favor del procedimiento que se adopte al respecto y de una severa y minuciosa reglamentacion de la ley.

La garantía se limita á un tiempo prudencial, sin perder de vista que ello es un ensayo, y que debe darse por un tiempo que asegure el desenvolvimiento de esa industria y remunerar el capital empleado de su explotacion.

El capital garantido se distribuye entre las cuatro provincias litorales, sin esccluir la capital de la República y territorios nacionales de la Pampa, porque estas localidades no solo poseen el mayor número de ganados que pueden servir para esta industria, sino tambien porque su situacion en la margen de los rios navegables ó las costas maritimas, las convierten necesariamente en los únicos puentes en que es posible situar las usinas y alimentar la elaboracion y explotacion de carnes.

El poder ejecutivo espera que el honorable congreso prestará á este asunto una atencion digna de su importancia.

M. JUAREZ CELMAN.

W. PACHECO.

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Art. 1º Autorízase al poder ejecutivo para conceder la garantía anual de 5 % por el término de diez años, sobre el capital de las empresas que se establezcan en la República para exportar carne bovina fresca ó conservada por procedimientos que no sean nocivos á la salud.

Art. 2º El límite del capital que comprende la presente autorizacion se fija en seis millones de pesos moneda nacional (pesos m/n 6.000.000) no pudiendo garantirse á cada empresa un capital mayor de un millón de pesos (ps. m/n 1.000.000) ni menor de quinientos

mil (500.000). El capital garantido se distribuirá en esta forma:

Para establecimientos que se instalen en la provincia de Buenos Aires, capital de la República y territorios de la Pampa	\$ 3.000.000
Para establecimientos que se instalen en la provincia de Santa Fé.....	" 1.000.000
Para establecimientos que se instalen en la provincia de Entre Rios.....	" 1.000.000
Para establecimientos que se instalen en la provincia de Corrientes.....	" 1.000.000

Art. 3º Las empresas que quieran acogerse á los beneficios de esta ley deberán presentarse al poder ejecutivo solicitando la garantía, de acuerdo con los trámites que establezcan los decretos reglamentarios de la misma.

Si los pedidos excedieran del capital fijado en el capítulo 2º, se resolverán por el orden de su presentacion, sorteándose en caso de igualdad de fechas.

Art. 4º No se hará concesion de garantía, sin que previamente sea aprobado por el poder ejecutivo el presupuesto de las instalaciones, materiales y cantidades en giro para el servicio y explotacion de la empresa, todo lo cual se consignará en el documento de la obligacion entre el Estado y la compañía.

Art. 5º Las empresas garantidas estarán obligadas á reservar por lo menos el 20 0/10 de su capital para que sea suscrito en la República.

Art. 6º Será obligacion de las empresas garantidas:

1º Constituir un directorio en la República, con socios residentes en el país, de reconocida posicion social, comercial ó industrial.

2º Llevar su contabilidad en idioma nacional.

3º Establecer su domicilio legal en la República.

4º Suministrar los datos ó informaciones que el poder ejecutivo les solicitare de conformidad con los reglamentos que espidiese para asegurar los fines de esta ley.

Art. 7º El poder ejecutivo determinará al reglamentar de esta ley, y de acuerdo con los hechos y las circunstancias de la industria garantida, el minimum de carne bovina medida al peso, que debe exportarse anualmente, con relacion al capital garantido de cada empresa.

Art. 8º El cálculo de las utilidades anuales, para los fines de la garantía, comprenderá la explotacion de todos los ramos industriales de la faena, como cueros, huesos, astas, ceniza, grasa, extracto y demás aprovechamientos del animal, de cualquier especie que sean.

Las empresas presentarán anualmente al poder ejecutivo una cuenta detallada de las operaciones del año transcurrido, para la liquidacion de la garantía correspondiente.

Art. 9º En los contratos se establecerá la cantidad anual que de las entradas brutas se asigne por deterioro de las usinas fijas, de acuerdo con las reglas científicas y comerciales existentes sobre la materia.

Art. 10. El poder ejecutivo nombrará los inspectores de las empresas garantidas, con las atribuciones que los decretos reglamentarios les asignen, para vigilar la observancia de los contratos; y sus sueldos serán pagados á prorrata por las mismas empresas.

Los datos que á ellos se suministren se mantendrán reservados, aplicándolos á los fines del control necesario para la ejecucion de esta ley.

Octubre 25 de 1888

CÁMARA DE DIPUTADOS

16ª Sesión de próroga

Art. 11. Las empresas garantidas estarán exoneradas de todo impuesto nacional ó provincial durante el término del contrato de garantía.

Art. 12. Las empresas garantidas estarán sujetas á los reglamentos de seguridad é higiene que las autoridades competentes establezcan.

Art. 13. Cuando las utilidades líquidas de la empresa excedan del 5 por ciento, el exceso será aplicado al reembolso de los anticipos, con intereses que el gobierno les hubiere hecho por razon de la garantía. Exceptuase de esta disposicion, y por el término de tres años, las empresas establecidas en el primer año de la vigencia de esta ley.

Art. 14. Es un derecho de las empresas garantidas renunciar en cualquier tiempo á la garantía, previos los arreglos del caso con el gobierno para el reembolso de las sumas que le adeuden por razon de la garantía recibida.

Art. 15. Queda derogada la ley núm. 234 de 20 de noviembre de 1887 en cuanto se refiere á la exportacion de ganado vacuno en pié y carne bovina fresca.

Art. 16. Los gastos que origine la ejecucion de esta ley se imputarán á la misma, y serán atendidos con el producto de la venta de las tierras públicas.

Art. 17. El poder ejecutivo reglamentará la ejecucion de esta ley.

Art. 13. Comuníquese, etc.

W. Pacheco

(A la comision de hacienda.)

ORDEN DEL DIA

MATRIMONIO CIVIL

Sr. Presidente—Continúa la discusion pendiente sobre el proyecto de matrimonio civil.

—Se da por aprobados los artículos 26 al 89 inclusive.

—En discusion el art. 90.

Sr. Castro—Pido la palabra.

Este artículo dice «Es anulable el matrimonio: 1º Cuando fuese celebrado el impedimento establecido», etc. Debe decir: «celebrado con el impedimento, etc.»

Sr. Zorrilla—Es error de impresion; debe corregirse.

Sr. Olmedo—Yo propongo sustituir las palabras *maridable* y *maritable* por *marital*. Cualesquiera que sean las modalidades de la jurisprudencia, me parece que no hay objeto en torturar la lengua.

Sr. Zorrilla—No hay inconveniente.

—Se aprueba el artículo con las correcciones indicadas, así como los siguientes hasta el 107 inclusive.

—En discusion el 108.

Sr. Pellegrini—Pido la palabra.

Este artículo es el que ha sido reformado por mis honorables colegas de la mayoría de la comision de legislacion, cuya reforma yo no acepté en el seno de la misma, reservándome el derecho de pedir á la cámara que sancionara el artículo que viene en el proyecto del senado.

La diferencia es la siguiente: la mayoría de la comision ha creído que la justicia civil solo debia ocuparse de los casos de divorcio ó nulidad de los matrimonios que se contrajeran despues de esta ley; y el proyecto del senado establece que toda cuestion de divorcio que se suscitare despues de la promulgacion de esta ley, ya sea de matrimonios contraidos antes ó despues de la ley, será juzgada por los jueces civiles.

El artículo sancionado por el senado es un artículo que está en armonia con todo el proyecto y con la mente del legislador, estableciéndose que toda accion que se ejercite respecto al matrimonio es considerada como una accion civil.

Luego entonces, desde el momento en que se promulgue esta ley, se considerará el matrimonio como una institucion civil, para los efectos civiles.

Como el divorcio y la nulidad producen efectos civiles que tienen que ser respetados y cumplidos por decision de los tribunales ordinarios, es natural que su conocimiento corresponda á los tribunales ordinarios.

Pido, pues, que se acepte el artículo 108 en los términos en que viene del senado.

Sr. Civit—Por el impreso que tenemos en la mano, la redaccion de uno y otro artículo es idéntica.

Sr. Pellegrini—Es un error de imprenta.

Sr. Olmedo—Que podríamos aprovechar.

Sr. Civit—Mejor sería.

Sr. Zorrilla—Pido la palabra.

La mayoría de la comision ha querido introducir la modificacion á que se ha referido el señor diputado, en la sancion del honorable senado, porque ha creído que, en estos casos, debia entender el juez bajo cuya accion se habia celebrado el contrato.

Ha creído encontrar la mayoría de la comision una falta de facultad en si misma, podemos decir, para señalar un tribunal distinto á aquel que por el derecho tiene creado todo individuo que celebra un acto.

El matrimonio, segun la redaccion que

quiere darle el señor diputado, vendría á caer bajo la intervencion de un juez que no existía cuando aquel acto se celebró, y, á juicio de la mayoría de la comision, esto es sumamente inconveniente.

Sr. Pellegrini—Permitame el señor diputado.

Voy á completar mi pensamiento.

La prescripcion legal que rige la materia, existe en el código civil, en el título «De la aplicacion de las leyes civiles».

Dice el artículo 4044: «Las nuevas leyes deben ser aplicadas á los hechos anteriores, cuando solo priven á los particulares de derechos que sean meros derechos en expectativa; pero no pueden aplicarse á los hechos anteriores, cuando destruyan ó cambien derechos adquiridos».

Y como los derechos de las cuestiones de divorcio y de nulidad son derechos en expectativa, es natural que pase todo á la nueva legislacion, y es por eso que el artículo 109 establece que cuando se trata del acto de la celebracion del matrimonio ante la Iglesia, se respete la ley anterior, puesto que desde que ha habido matrimonio ante la Iglesia, hay un derecho adquirido que la nueva ley no puede desconocer.

Así es que no atacamos en lo mas mínimo los derechos, como lo cree la mayoría de la comision.

Sr. Civit—Me permite?...

Entiendo que la comision propone modificar el despacho.

Sr. Pellegrini—Suprime la palabra «antes».

Sr. Civit—Entonces, me parece que lo que corresponde es votar si se autoriza ó nó á la comision á modificar su despacho.

Sr. Zorrilla—No, señor, porque es un error de imprenta.

Sr. Mansilla—La comision sostiene su despacho, y nosotros queremos aprovechar el error de imprenta.

Sr. Civit—Precisamente, de eso me quiero aprovechar.

Sr. Olmedo—Para eso habria sido preciso que el miembro informante de la minoría de la comision se hubiese callado.

Sr. Civit—Eso es.

Sr. Pellegrini—Permitame.

Aquí procedemos de buena fé; ha habido un error de imprenta..

Sr. Mansilla—Podemos hacer una cosa. Votar como está impreso, y si se rechaza, quiere decir que prevalece el despacho de la mayoría de la comision.

Sr. Malbran—Eso es invertir el orden.

Lo que hay que votar en el despacho de la comision.

Sr. Pellegrini—Que se vote el despacho de la comision, con la enmienda.

—Se vota el artículo propuesto por la mayoría de la comision y resulta rechazado.

—Se vota en los términos sancionados por el honorable senado y es aprobado.

—En discusion el artículo 109.

Sr. Pellegrini—Las mismas razones que he tenido para no aceptar las modificaciones del artículo anterior, las he tenido para no aceptar este.

Así es que pido que se vote primero el artículo de la mayoría de la comision, y si es rechazado, que se vote el artículo 109 del proyecto del senado.

Sr. Zorrilla—La mayoría de la comision no ha tenido otras razones para proponer este artículo que las que manifesté anteriormente.

Sr. Pellegrini—Son dos artículos correlativos.

—Se vota el artículo 109 en la forma propuesta por la mayoría de la comision y es rechazado, aceptándose en la siguiente forma, sancionada por el senado:

«Cuando se tratase de un matrimonio celebrado con anterioridad á esta ley y la accion de nulidad se fundare en un impedimento, se aplicarán las disposiciones de esta ley;—si la accion se fundare en defectos de forma, se aplicarán las leyes canónicas.»

—Se aprueban sin observacion los artículos 110 al 115 inclusive.

—En discusion el 116.

Sr. Mansilla—Y si el empleado no tiene con qué pagar?

Alguna penalidad hay que imponerle en ese caso.

Sr. Pellegrini—Si es empleado, tendrá su sueldo y con él pagará.

Sr. Mansilla—Descaria que se propusiera algo que salvara esta dificultad que apunto.

Sr. Castro—Pido la palabra.

Octubre 25 de 1888

CÁMARA DE DIPUTADOS

16ª Sesión de próroga

Es un principio de jurisprudencia universal, señor, que cuando una pena pecuniaria no se puede cumplir, se convierta en pena corporal. De lo contrario, se hace ilusorias las disposiciones de la ley, y se puede cometer impunemente actos punibles.

Supóngase que á ese oficial público que falta á sus deberas se le impone la multa y que es destituido, además. ¿Con qué paga la multa, y con qué cumple las disposiciones de la ley?

Es preciso proveer algo en este sentido.

Creo que debe decirse: «En defecto del pago de la multa, se le impondrá un arresto de uno á tres meses».

Esto, á fin de que no quede impune cuando falte á sus deberes.

Propongo esta forma.

Sr. Mansilla—Arresto, no me satisface. Ese empleado público puede ser un empleado venal y pasar por que le sobornen.

Dirá: ¿Qué me importa tres meses de arresto si he embolsado la plata?

Debemos tener presente que así como se puede comprar estos favores á la Iglesia, se puede comprarlos también á los empleados civiles.

En fin, deseo alguna cosa que sea mas severa y que, por consiguiente, ofrezca mas garantías.

Sr. Zorrilla—Pido la palabra.

Tiene diversas penalidades este oficial público. Por una parte, tiene pérdida del empleo, (art. 15); despues, prision, (art. 15), y por último, multa.

Creo que no se puede pedir mas.

Por lo demas, es de suponer que alguna importancia tenga el oficial del registro civil delante del cual debe celebrarse estos actos; y creo que seria difícil encontrar uno que no tuviera 100 pesos para abonar la multa ni bienes que dar á embargo.

Así es que no se puede agregar mas.

Sr. Pellegrini—Aquí se trata de pequeñas contravenciones que se pagarán por medio de una multa.

Las contravenciones de otra importancia tienen ya pena establecida en la ley.

Despues, por el artículo 116 no se impone la destitucion. Así es que debe suponerse que el empleado permanecerá en su puesto y tendrá con que pagar la multa.

Sr. Olmedo—Yo votaré por este artículo,

porque en el caso de ocurrir una de estas contravenciones que se podría llamar de menor importancia, no es seguro que el empleado falte concientemente á sus deberes y á las prescripciones de esta ley. Puede ser mas bien por deficiencia de sus conocimientos, por olvido ó en fin, por negligencia. —En estos casos debe ser, indudablemente, castigado; pero de una manera mucho mas leve.

Sr. Mansilla—Que se vote.

—Se vota el artículo en discusion y se aprueba.

—En discusion el 117.

Sr. Olmedo—Pido la palabra.

El artículo leído dice al final del primer párrafo: «responde al otro de la *pérdida* é intereses, etc.¿ Que significa esto de *pérdida*? No entiendo.

Sr. Pellegrini—Es lo que establece el código civil en el título sobre pérdidas é intereses. Entenderá mejor el señor diputado por daños y perjuicios, que son los términos empleados en la antigua legislacion.

Pérdida es lo que efectivamente pierde el individuo por un daño; é intereses es lo que podría haber ganado.

Sr. Olmedo—Pero, señor, yo comprendería que se usase en plural: pérdidas. Pero el singular es cuando ménos uno de esos barbarismos jurídicos, que no se esplica se pongan en una ley que no está hecha para que la entiendan solamente los jurisconsultos.

Me parece que debe ponerse mas claro: daños é intereses.

Sr. Pellegrini—Puede decirse *pérdidas* é intereses.

Sr. Olmedo—Perfectamente.

—Se aprueba el artículo con esta modificacion.

Sr. Pellegrini—Pido la palabra.

Antes de pasar adelante voy á permitirme proponer un nuevo artículo entre esta série de artículos penales para los funcionarios públicos que desempeñan ciertos actos en la celebracion del matrimonio.

Por el artículo 272 del código penal en vigencia se establece que el eclesiástico que á sabiendas autorice un matrimonio ilegal sufrirá confinamiento por el mismo tiempo que se aplique al contrayente la prision, ó en su caso la multa.

Ya se vé cual es el espíritu de la legislacion

vigente: que un sacerdote que case habiendo impedimento para contraer matrimonio, —impedimento que no anule el matrimonio, pero, que exista por no haberse llenado ciertas formalidades exigidas por ley civil: —tenga la pena de confinamiento, es decir, sea sacado de su jurisdicción y confinado por cierto tiempo en otro punto del territorio argentino.

Puede suceder que, explotando el fanatismo religioso y por la ignorancia de las leyes civiles, á una persona se le engañe y se le haga contraer matrimonio religioso solamente, creyendo, en conciencia, que están llenadas todas las formalidades para que el matrimonio sea válido y tenga sus efectos civiles.

Y si bien es cierto que después de la ceremonia religiosa puede venir la ceremonia civil, también puede suceder que se aproveche el contrayente, que procede con ánimo doloso, de la posición en que se encuentra, y eluda las prescripciones civiles.

Tendría que procederse al juicio civil para obligarlo al casamiento civil, y ya el senador Pizarro hizo notar en el senado los peligros que había en este intervalo entre el matrimonio religioso y el civil, y estableció los casos que se producirían de demandas para el cumplimiento de la promesa de uno de los contrayentes respecto á la celebración del matrimonio civil.

La autoridad que interviene en los actos eclesiásticos sabe que no producen efectos legales, y que esta unión, para la ley civil, es un concubinato perpétuo; y entonces yo digo: si el sacerdote sabe que el matrimonio es ilegal, no debe dar su bendición religiosa, antes de que el matrimonio se celebre civilmente.

Así es que voy á proponer un artículo que en diversa forma fué rechazado en el senado, creo que por mayoría de un solo voto; es calcado sobre el del código penal: «El eclesiástico que autorice el matrimonio religioso sin tener á la vista el acta á que se refieren los artículos 47, 48, 50 y 52, en su caso, estará sujeto á las responsabilidades establecidas en el artículo 1081 del código civil: y si desempeña funciones públicas sufrirá confinamiento por un año.»

El artículo 1081 del código civil dice: «La obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, enseñeros ó cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal».

En este caso pueden producirse perjuicios á alguna de las partes; y es natural que ella acudirá en demanda de reparación de daños, ante la justicia ordinaria, y el sacerdote que

ha intervenido en esta ceremonia religiosa, sin haber tenido presente el acto de la ceremonia civil, incurrirá en las prescripciones de la ley y tendrá que atenerse al pago de daños y perjuicios á la parte damnificada. Y si es un cura párroco, entonces vendrá el confinamiento de él á otra jurisdicción.

Creo que aquí no se ataca, en manera alguna, á los eclesiásticos, de cualquier secta que sean, ya de las toleradas ó reconocidas por el estado, ya del culto católico, apostólico, romano; ya de las de la iglesia protestante inglesa, ó de cualquier otra existente en el país.

No se ataca, en lo mínimo, á ninguna de esas sectas, puesto que los legisladores deben persuadirse de que todos los habitantes del país van á respetar esta ley y que los primeros que la respetarán serán los encargados de difundir en el país la enseñanza de la moral y el respeto á las instituciones.

Así es que no creo, aun cuando soy el que propongo este artículo, que ningún sacerdote procederá á efectuar la ceremonia religiosa sin llenar este requisito, aun cuando la ley no lo hubiese previsto.

Sin embargo, el legislador debe ponerse en todos los casos.

Y creo tanto que los sacerdotes cumplirán con esta ley, tal cual ella se sancione, que invocaré un precedente que se ha mencionado en las sesiones del senado segun creo por el senador Del Valle: él llamaba la atención respecto de un sacerdote de Italia, quien, viendo que se estaba procediendo á casar religiosamente á una gran mayoría de la población, prescindiendo de las prescripciones legales y encontrándose los así casados, en un momento dado, con que los hijos no podían heredar y con que habían vivido en un concubinato permanente; este sacerdote fué el primero en indicar la necesidad de que todos los prelados, al celebrar las uniones religiosas, exigieran el certificado del registro civil.

Fué este sacerdote quien puso ante los ojos de los demás el precepto moral que encierra esta prescripción que hoy pido se reduzca á un artículo especial.

Sr. Zorrilla—Pido la palabra.

Es esta una de las disidencias fundamentales que hemos tenido con el miembro de la minoría de la comisión. Digo fundamental, porque, á juicio de los miembros de la comisión, hiere el pensamiento fundamental del proyecto mismo.

Ha sido remitido por el poder ejecutivo de la nación, ha sido discutido y sostenido en una y otra cámara, presentándolo como la emanación clara de las prescripciones de

Octubre 25 de 1888

CÁMARA DE DIPUTADOS

16ª Sesión de próroga

la constitucion, con el objeto de armonizar la legislacion civil con las prescripciones mismas de la constitucion politica: ha sido presentado como una garantia á la libertad de conciencia, el derecho que tiene cada hombre de adorar á Dios segun sus creencias y de ajustar á esa libertad todos los actos de la vida religiosa.

Por consiguiente, si se ha de establecer que queda prohibido á todo individuo que crea que el matrimonio religioso debe preceder al matrimonio civil, si le queda prohibido, digo, celebrar estas uniones sin previamente tener á la vista el certificado del registro civil, viene á atentarse contra esa creencia, sin derecho alguno y, como lo demostraré despues, sin conveniencia alguna.

El señor diputado decia que debe castigarse al cura en el caso de que se celebrara el matrimonio religioso antes que el civil.

Pero le observaré que en ninguna parte de la ley se ha prohibido ese hecho. No se dice que el matrimonio civil deba hacerse antes ó despues.

Lo único que se prohíbe es que pueda hacerse en el acto de celebrarse el contrato.

Por consiguiente, habria que establecer dos articulos, uno que prohibiera este hecho, y el otro que lo penara.

Pero, en caso de penar ¿á quién se va á penar? ¿Quien es el criminal? El sacerdote? ¿Los cónyuges? ¿Los cómplices vendrán despues?

En este caso prescindimos de los delincuentes y castigamos al presunto cómplice.

El mismo sacerdote se encontraria violentado porque en ese momento, él, ejerciendo su ministerio, si no hubiera una prohibicion expresa en la ley, creeria que estaba en su derecho para autorizar con su presencia el matrimonio religioso.

Se dice que no se celebrará tal vez el matrimonio civil. Pero pregunto, ¿en qué se funda eso? ¿Cuando las leyes no han regido en nuestro país? ¿Dónde está esa debilidad del brazo del Estado para hacer cumplir su legislacion positiva?

Decia el señor diputado Pellegrini que quedaria el concubinato delante de los ojos de la ley en los matrimonios religiosos celebrados sin ir despues al registro civil.

Pero yo digo: ¿de donde viene esta nueva prevencion ó este celo contra el concubinato, en este momento, y sobre todo cuando él quiere hacerse pesar, por medio de una disposicion penal, contra el culto?

Hace ya muchos años que se levantó el primer censo de la República, y el dió, en

algunas provincias, este dato: una tercera parte de la poblacion vivía en concubinato, puesto que señalaba ese censo, en diferentes provincias que no quiero nombrar, que una tercera parte de los ciudadanos eran ilegítimos.

Y el congreso, delante de ese hecho, no pronunció una palabra.

Pero se trata del casamiento que puede celebrar la mayoría del pueblo argentino, que es católica, y entonces recién nos acordamos de que es necesario reparar esta falta; y repararla ¿en quién? En el cura que autoriza el acto, pero no en los delincuentes,

No puede negarse que esto es muy original.

Se cita el ejemplo de otros países; se dice: en Francia, en Italia, pasa tal cosa.

Pero, señor presidente, ¿por qué se cita esas naciones tan lejanas, donde no podemos ir á investigar los hechos que explican cada caso? ¿Por qué no se cita el Estado Oriental, en cuyo país en los años que lleva de vigencia la ley del matrimonio civil, no ha producido ella, bajo este punto de vista, los males desastrosos que aquí se temen, no obstante de permitir, como esta, que el matrimonio religioso preceda al civil?

Por otra parte, la ley no dá absolutamente efectos civiles al matrimonio religioso. Por consiguiente, la penalidad está perfectamente donde está puesta con la sancion del senado, aconsejada por la comision. Eso basta.

Los cónyuges se encuentran en una situacion muy especial: el marido no es tal marido; la mujer no es tal mujer; los hijos no son tales hijos legítimos.

Se vé, pues, que la penalidad está donde debe estar.

Por otra parte, es original esta legislacion que dice: los unos no saben, los otros son atrasados; y, entónces, para castigar á los que no saben, á los miembros de las sectas que han de prestar obediencia á esta ley, se dice: se casarán primero religiosamente y despues civilmente.

Pero en nombre del atraso y de la ignorancia no debemos dictar una legislacion distinta en contra de los civilizados y de los ilustrados.

Castiguemos á esos, hagamos que la ley se cumpla, dictemos otras nuevas leyes si las penalidades establecidas no son bastantes; pero no vengamos, señor presidente, á coartar la conciencia á los mas ilustrados, en nombre de los que lo son menos.

He dicho.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pido la palabra.

Octubre 25 de 1888

CÁMARA DE DIPUTADOS

16ª Sesión de próroga

Respetando mucho la ciencia del señor diputado que ha propuesto este artículo, me permito manifestar que es difícil amontonar, aglomerar tantos errores legislativos en tan pocas palabras.

La pena de confinamiento está abolida en nuestra legislación penal.

Por consiguiente, sería curioso que una pena que existía antes de nuestra legislación penal, que la legislación penal moderna ha abolido por inconveniente, se viniese á hacerla revivir en una ley de matrimonio.

El señor diputado comenzó por decir que él no temía que los sacerdotes de las distintas religiones que hay en el país autorizarían matrimonios religiosos antes que se autorizasen los matrimonios civiles. Entonces ¿cuál es el peligro que el señor diputado vé?

Y si no existe el peligro, si esta es su creencia, el artículo es completamente inútil.

Por otra parte, es contra toda regla de legislación castigar al que sería cómplice en favor del que sería el autor del hecho castigado.

¿Se cree que el sacerdote casa, que el escribano contrata? No, señor. Contratan las partes; el escribano es el testigo del contrato; el sacerdote no casa á nadie, se casa el hombre y la mujer; el sacerdote es un testigo. Y en el matrimonio religioso, católico, se necesita la presencia de tres testigos. Dos pueden ser cualesquiera, pero uno tiene que ser el párroco.

Se castiga á un testigo y no se castiga á los otros testigos; faltando el cura, no hay matrimonio; faltando un testigo, no hay matrimonio.

De manera que para que sea válido el acto, según la Iglesia, es necesario la presencia de dos testigos.

Estos quedan exentos de pena, cuando la participación que han tenido en el acto es igual á la del sacerdote, ya sea católico o mahometano, y á un testigo se le castiga y á los otros no.

Pero, ¿quiénes son los autores del hecho? El hombre y la mujer que se han casado, porque los otros no son sino testigos de este acto, y ellos no solo son inocentes, sino que hasta son defendidos por la pena que se impone al párroco.

Al párroco se le obliga á indemnizar á los autores de los hechos los daños y perjuicios que se le hayan irrogado.

Todavía podemos avanzar, haciendo hipótesis, para demostrar que pueden en estos casos ser los únicos culpables los otros dos

testigos y no el párroco, porque, según la legislación de la Inglaterra, hay matrimonio religioso válido cuando el cura es sorprendido, cuando él no ha tenido intervención voluntaria. Entonces, los otros testigos del acto no son castigados, los contribuyentes y el cura tampoco lo son; de manera que la ley queda quebrantada.

Al cura no se le podría castigar por el delito de haber oído lo que no podía dejar de oír cuando se le sorprendió, y á los otros testigos y á los contrayentes tampoco se les castigaría.

Tendremos, pues, eludida esta ley, sin que reciba punición ninguna el que ha contribuido á eludirla.

Entonces, si hay el propósito en la cámara de precaver el caso de que primero se celebre el matrimonio religioso y después el civil, que se redacte el artículo de otra manera, imponiendo penas á los que sean mercedores de la pena; pero que no se castigue á un cómplice en defensa del autor del hecho.

Es como si los padrinos de un duelo pagaran las puñaladas que recibió uno de los duelistas, y que el médico que concurrió al duelo no solo asistiese devalde al herido sino que pagase las medicinas que le suministraran y que dejase de ganar durante todo el tiempo que durara la enfermedad.

Si en la cámara domina la idea de poner un artículo represivo de eso, que por lo menos se redacte el artículo en términos convenientes.

Sr. Mansilla—Yo creo que domina ese espíritu en la cámara.

Por esa razón yo desearía que pasáramos á cuarto intermedio.

Varios señores diputados—Nó!

Sr. Mansilla—Entonces, no vamos á hacer nada, porque el artículo tal como está no podemos votarlo.

Sr. Pellegrini—Pido la palabra.

El señor ministro acaba de decir que el confinamiento está abolido por nuestras leyes; pero, según un artículo del código penal, al que ya me he referido, el confinamiento no está abolido de nuestra legislación.

Cuando en el honorable senado se propuso...

Sr. Ministro de J. C. é I.—¿Quiéreme el servicio de leer la escala de las penas?

Octubre 25 de 1888

CÁMARA DE DIPUTADOS

16ª Sesión de próroga

Sr. Pellegrini—No tengo en mi poder el código.

Es un artículo que he copiado del código penal.

Entiendo que el confinamiento es la simple separación del lugar en que ejerce sus funciones un sacerdote.

El señor ministro acaba de traer un ejemplo, diciendo: que cuando se castigaba á los padrinos de un duelo, se debía castigar, previamente, á los duelistas.

Pero, en el caso de que en un duelo murieran los dos contendientes, ¿á qué duelistas se iba á castigar?

Tendría que procederse contra los testigos.

En este caso, los que se casen ante la Iglesia, sin tener las actas del matrimonio civil, tienen la pena de que, para la ley, no hay tal matrimonio; y su castigo es que han producido un acto completamente nulo. Es para ellos como la muerte, moralmente hablando.

Sr. Olmedo—Pido la palabra.

Voy á proponer, señor presidente, un artículo penal para los que contravengan á las disposiciones de esta ley.

En el deseo de no hacer una demostración detenida de este asunto, diré simplemente que la razón determinante para establecer esta penalidad en la ley, y si se admite el respeto absoluto de esta misma ley relativamente del matrimonio religioso simplemente, sin la celebración del matrimonio civil, nos esponemos á encontrarnos en el caso de una multitud de matrimonios celebrados según los ritos religiosos de cada secta, en los que no se haya llenado las prescripciones de la ley civil.

Esto, en virtud de las precauciones de los creyentes, estimulados, sin duda, por los ministros de los respectivos cultos, para no realizar el matrimonio civil sino el religioso, que ellos creen suficiente.

De aquí resultará que estos matrimonios, realizados bajo el solo carácter religioso, quedarían desamparados respecto de la ley civil, y ésta tendría que reaccionar mañana contra sí misma, para ampararlos por disposiciones nuevas, que los comprendiesen espresamente.

Así, sería necesario, dentro de un año ó dos de la vigencia de esta ley, reconsiderarla y declarar que los matrimonios celebrados hasta esa fecha, aunque no se hubieran celebrado ante los funcionarios civiles, gozarían de los beneficios legales.

Sr. Mansilla—Y declarar legítimos los hijos!

Sr. Olmedo—Y declarar legítimos los hijos, comprendiéndolos en las leyes que regulan la herencia y demás. De donde resultará un conflicto y una multitud de inconvenientes en la vida social.

Es por esta única razón, y no por razón de oposición, de mala voluntad, de sospecha contra los ministros de una determinada religión, que propongo esta penalidad.

Pero la voy á modificar en el fondo, me parece, y en la forma, respecto del artículo propuesto por el señor diputado.

Yo establecería un artículo, que el señor secretario se puede servir redactar, que dijera mas ó menos esto: «Los contrayentes, el párroco y demás testigos de un matrimonio religioso celebrado sin la presentación previa de los documentos que justifiquen haberse realizado el matrimonio civil, serán penados con una multa de 500 á 1000 pesos, ó en su defecto con uno y tres meses de prisión.»

Sr. Pellegrini—Y ¿cómo va á poner preso al arzobispo de Buenos Aires?

Sr. Olmedo—Yo no voy á ponerle preso.

Sr. Pellegrini—Como habla de prisión....

En el senado se suscitó la misma cuestión, y se dijo: la prisión no se puede imponer.

Pero se puede estrañar á un sacerdote, á un cura, es decir, separarlo de la jurisdicción en que funciona.

Sr. Olmedo—El arzobispo de Buenos Aires no lo hará.

Sr. Pellegrini—Hay que ponerse en todos los casos.

Sr. Civit—¿Qué es lo que propone el señor diputado?

Sr. Olmedo—«Los contrayentes, el párroco y demás testigos de un matrimonio religioso celebrado sin la presentación previa de los documentos que justifiquen haberse realizado el matrimonio civil, serán penados con una multa de quinientos á mil pesos, ó en su defecto con uno á tres meses de prisión.»

Sr. Civit—Perfectamente; me parece que estamos de acuerdo.

Para hacer mas correcta la redacción, se podría formular el artículo en estos términos: «Los ministros, pastores y sacerdotes de cualquier culto, religión ó secta que procedieran á la celebración de un matrimonio sin tener á la vista el acta á que se refiere el art. 45, estarán sujetos á las responsabili-

Octubre 25 de 1888

CÁMARA DE DIPUTADOS

16ª Sesión de próroga

dades establecidas por el código civil, artículo 1081, y si desempeñasen oficio público serán separados de él.» Ahí se podría agregar lo que indicaba el señor diputado respecto de los contrayentes y testigos.

Sr. Olmedo—No tengo inconveniente en aceptar.

Lo único que deseo establecer, después de lo que ha dicho el señor ministro, es que no es justo penar á un testigo cuando no se peca al autor del delito.

Sr. Civit—Noto que el artículo 1081 del código civil incluye lo que indicaba el señor diputado, pues dice: «La obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, consejeros ó cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por derecho criminal.»

Me parece, pues, que no habría necesidad de agregar los contrayentes ni los testigos, que ya están comprendidos en este artículo.

Pero si el señor diputado quiere agregarlos...

Sr. Olmedo—Me parecería mejor, para hacer la disposición mas clara y equitativa.

Sr. Civit—Muy bien.

Entonces, podría principiar el artículo: «Los contrayentes, los testigos y los ministros, pastores ó sacerdotes»....etc (como sigue lo demás.)

Sr. Pellegrini—Y á una menor, á una niña de quince ó diez y seis años; ¿se le vá á poner presa?

Varlos señores diputados—¿Como nó!

Sr. Mansilla—Si tiene ganas de casarse, ¡que aguante! (*Risas.*)

Sr. Pellegrini—Demasiado aguantan con la nulidad del matrimonio!

Sr. Mansilla—Sería una niña de mucho porvenir!

—Se lee el artículo propuesto

Sr. Mansilla—Puede votarse por partes.

Sr. Castro—Pido la palabra.

La cámara me permitirá que funde mi voto en favor de este artículo.

No se puede ocultar á persona alguna que, aun cuando los sacerdotes se llamen testigos al intervenir en un matrimonio, ellos

tienen autoridad bastante, sobre todo en nuestro país y dados nuestros antecedentes y modo de ser, para aconsejar y para determinar á las personas á que contraigan matrimonio puramente religioso. Y no escapará á la penetración de los señores diputados que, especialmente en nuestras campañas, el consejo de un sacerdote es decisivo para efectuar el casamiento de personas que lo celebran sin escrúpulo una vez que escuchan la palabra de un ministro de altar.

Por otra parte, señor presidente, los inconvenientes que apuntaba el señor diputado por Córdoba son evidentes é innegables; y tenemos necesidad de recurrir á la experiencia ajena, á lo que ha pasado en pueblos adelantados y que tienen establecida de muchos años atrás la institución del matrimonio civil.

La Italia, cuando en 1866 dictó la ley de matrimonio civil, incurrió en el error de suprimir todo castigo para los sacerdotes, y por este solo hecho facilitó la celebración del matrimonio religioso con prescindencia del civil. Y así se casaban los habitantes de las campañas de Italia, que por error ó ignorancia se creían realmente unidos en matrimonio con la sola ceremonia religiosa. Y resultaba que las esposas que se creían casadas, vivían en verdadero concubinato, y que los hijos que se creían legítimos, eran simples hijos naturales.

Según una estadística que he tenido á la vista, desde el año 66 hasta el 71, en que se modificó la ley, solo en Palermo, entre ocho mil y tantos matrimonios, dos mil quinientos eran ilegales.

De manera que la redacción del artículo del senado me parece mas correcta que la del señor diputado.

Sr. Civit—Yo he aceptado la modificación por complacencia con el señor diputado por Córdoba.

Sr. Molina—Pero es que esta complacencia importa una derogación de los principios generales de derecho civil.

Sr. Civit—Perfectamente.

Se puede salvar el inconveniente haciendo la votación por partes.

Sr. Olmedo—La razón de mi modificación introducida al artículo, no es tampoco espontánea: es una declinación de responsabilidades que sucesivamente tenemos que ir haciendo los que hemos tomado participación en este incidente.

El señor ministro insinuaba que no era equitativo que el párroco de una religión pagara multas ó sufriera penas por haber sido testigo de la consumación de un delito,—

Octubre 25 de 1888

CÁMARA DE DIPUTADOS

16ª Sesión de próroga

pues como tal se clasifica por la ley,— y que es evidente que si es responsable el sacerdote, deben también sufrir pena los cónyuges que son autores del delito.

Es para armonizar con esas ideas del señor ministro y establecer un principio de penalidad para los que permitían ese delito ó sean instrumentos de él, que yo propuse las palabras que el señor diputado por Mendoza aceptó en la redacción de su artículo.

Por mi parte, creo que, como al fin y al cabo la idea de celebrar el matrimonio religioso exclusivamente, no es susceptible de surgir en el ánimo de los esposos, sino que puede ser insinuada por algún pastor ó sacerdote, estableciendo la penalidad para estos no se celebrará ninguno que no sea consecuencia de un matrimonio civil anterior.

Sr. Molina—Mi observación es respecto de la parte que se refiere al artículo 1081, del código civil, que establece la indemnización á que está obligado todo el que causa daño á otro, y esta indemnización no cabe tratándose de los contrayentes del matrimonio, que son los que han cometido el delito.

Sr. Olmedo—Yo había propuesto una multa á favor del fisco.

Sr. Molina—Entonces, quedaba mejor la redacción primitiva.

Sr. Presidente—Se votará el artículo propuesto por el señor diputado por la capital.

Sr. Pellegrini—Permítame el señor presidente.

En estos casos el delito es del sacerdote que celebra un acto que la ley prohíbe.

Yo no considero que cometen delito los que se casan religiosamente. El delito está en el sacerdote que bendice ese acto, y es á él á quien debe castigarse, no á las partes contrayentes, que se pueden casar religiosamente ó como quieran.

¿Qué pena se le va á dar á una niña de 16 años y á un varón de 17 porque se hayan casado ante la Iglesia? La culpa es del sacerdote que les ha hecho creer que están casados.

Por consiguiente, mejor sería votar el artículo hasta donde dice «estará sujeto», y después establecer las distintas penas.

Sr. Mansilla—Pido la palabra.

Voy hacer una sencilla observación.

Ya dije que era conveniente pasar á cuarto intermedio.

Varios señores diputados—¡No, no!....

Sr. Mansilla—¡No, no!...

A esos no! no! diré como el sabio antiguo: Pega pero escucha!

Hagan lo que quieran, pero tengan la bondad de escuchar, tanto mas cuanto que hago uso de mi derecho, é invoco la consideración personal de mis colegas, sea cuales sean sus opiniones en este asunto.

Creo que el artículo es de suma trascendencia, y que no debemos improvisar.

¿Qué es lo que queremos? Que los sacerdotes no bendigan una unión que los que van á realizarla creen en conciencia, equivocadamente, que es legítima. Eso queremos evitar.

Entonces, escogitamos un temperamento que consiste en decir al sacerdote, sea cual sea su religión (pero entendemos que el sacerdote que ofrece principalmente ese peligro es el católico, por que la mayoría de los habitantes del país son católicos): No case usted, no bendiga usted esa unión, por que usted es pasible de tal pena.

A mí me parece que si el artículo se limitase á esto, respondería al espíritu de la cámara, y que ir mas allá es pecar en un exceso que que no comprendo bien.

Yo no espero, lo digo con toda sinceridad, que en nuestro país se hagan predicaciones, como en otros, incitando á los habitantes á no casarse civilmente; y no lo creo, porque tengo el íntimo convencimiento de que el clero católico, apostólico romano, argentino, ha de inspirarse en lo que ha pasado en otros países.

¿Qué ha sucedido en Italia, que ha sucedido en España? Qué beneficios ha reportado la sociedad, la familia, la moral con esa práctica? ¿Para que repetirlo? Lo sabemos.

Cuando en Italia ocurrían á los tribunales las mujeres abandonadas, los jueces tenían que ser frios como el mármol; les decían: No os conozco, no se si sois casadas. Esto bastó para que se apercibiesen.

¿Que sucedió en España? Que fué necesario dictar una ley declarando válidos los casamientos religiosos.

Lo que nosotros necesitamos es llevar la tranquilidad á la familia, al hogar, á la sociedad, en una palabra, á la mayoría de este país que es católico; y aquí se trata de un exceso de previsión, que yo creo que cabe dentro de la ley, pero sin esparcirlo tanto que querramos también castigar á aquellos que se casan, los cuales, ya en el hecho de casarse fuera de la ley, se exponen á una porción de consecuencias, entre las cuales resalta esta: que la mujer quede abandonada por el marido, que es lo peor que puede su-

Octubre 25 de 1888

CÁMARA DE DIPUTADOS

16ª Sesión de próroga

ceder, aun cuando quien sabe, según la clase de pájaro de que se trate, si esto no viene á ser un gran bien, porque así ella quedaría habilitada para poder casarse civilmente. Tendrá un vicio, pero hay siempre una regeneración posible en la familia.

Por consiguiente, no me mezclaré más en esta discusión, pero temo mucho, lo repito, que un voto poco deliberado, que una redacción impaciente, nos haga dictar un artículo, en una ley de esta trascendencia, que pueda ser quizá, no digo un anacronismo, sino también un verdaderamente sarcasmo.

Sr. Civit—En el deseo de que el artículo que se proyecta sea sancionado por la cámara, y á fin de armonizar las diferentes ideas que se han emitido, voy á permitirle proponer una modificación en el artículo, declarando que la propongo de acuerdo con el señor ministro del culto; que es él quien me la ha sugerido, y que por consiguiente, la acepto porque viene á dar el mismo resultado que buscaba, y porque viene á armonizar, se puede decir, las ideas que él ha manifestado aquí, con las que yo tengo al respecto.

En lugar de hacerse referencia al artículo 1081 del código civil, pido que se haga referencia al artículo 147 del código penal.

El artículo del código penal á que me refiero, dice así: «El eclesiástico que á sabiendas autorice un matrimonio ilegal, sufrirá la pena de arresto de tres meses á un año.

«Si autorizase el matrimonio ilegal, sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber exigido los comprobantes de que los contrayentes están habilitados para el acto, la pena será de arresto de tres meses».

Sr. Mansilla—En esa forma, yo votaré por el artículo.

Sr. Pellegrini—Por mi parte retiro el que había propuesto, porque mi pensamiento concuerda con el del señor diputado.

Pero pido que se vote por partes, para votar en contra de las primeras palabras del artículo, dejando solamente: «Los ministros, pastores ó sacerdotes, etc.»; y lo demás como está:

—Se vota por partes el artículo, y se acepta con la supresión de las palabras: «Los contrayentes, los testigos,» quedando lo demás en la forma redactada por el señor Civit.

—Se aprueba igualmente los artículos 118 y 119.

Sr. Pellegrini—Pido la palabra.

Propongo que se restablezca el artículo del senado que dice: Derógase todas las disposiciones del código civil relativas á hijos sacrilegos», etc.

Propongo esto porque está de acuerdo con la esencia de esta ley.

Desde el momento que se ha abolido el impedimento del sacramento de orden, es natural entónces que los hijos que nazcan ó hubiesen nacido de esas uniones, sean hijos naturales ó legítimos.

Quiere decir que si permitimos á los padres de esos hijos que se casen desde que se promulgue la ley en adelante, se les debe permitir también que reconozcan á los hijos habidos antes de esta ley.

Esto no lo acepta la mayoría de la comisión.

Sr. Presidente—Se va á votar primero el artículo de la mayoría de la comisión; y en el caso que sea rechazado se votará el del senado.

—Se vota el artículo propuesto por la mayoría de la comisión y es rechazado, aceptándose el del proyecto del senado.

—En discusión el artículo 120.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Debo hacer presente que hay un error de referencia en este artículo. No es el artículo 8º del código civil.

Hago esta observación para que el señor secretario se sirva corregir el error.

Sr. Presidente—Así se hará.

—Se dan por aprobados los artículos 120 al 124 inclusive.

—En discusión el 125.

Sr. Pellegrini—Pido la palabra.

Pido que se restablezca el artículo del senado.

Cuando se trata de procedimientos no hay derechos adquiridos.

Luego, entónces, debe pasar á la nueva legislación, aun cuando esté iniciada ante otro juez, la causa.

Así es que pido que se rechace el despacho de la mayoría de la comisión y que se acepte el artículo 125 sancionado por el senado.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pido la palabra.

Creo que el artículo del senado debe efectivamente suprimirse.

Octubre 25 de 1888

CÁMARA DE DIPUTADOS

16a Sesión de próroga

En primer lugar, no es una disposicion que altere en nada el espíritu ni las tendencias de la ley sancionada por el congreso. Y hay verdadera inconveniencia en la sancion de ese artículo.

Todos los códigos de procedimientos de las provincias dan jurisdiccion á los tribunales superiores para conocer de los recursos que se interpongan contra las sentencias de los jueces de primera instancia.

Los tribunales superiores de las provincias vendrian aqui en estos casos, si el artículo subsistiera, á conocer de recursos entablados contra sentencias de las curias eclesiásticas.

El congreso nacional no puede modificar las leyes de procedimiento y de jurisdiccion dictadas por las provincias para sus tribunales.

Resultaria otro inconveniente.

Dada la organizacion de los tribunales eclesiásticos de la República, de una curia se apela á otra curia. Por ejemplo: de la curia de Buenos Aires se apela á la curia del Paraná.

Supongamos un asunto matrimonial iniciado ante esta curia y que se encuentra en apelacion ante la curia del Paraná. ¿A cuál cámara pasaria? Pasaria á la cámara del Paraná donde estaba radicada la instancia.

Pero, como los tribunales civiles de aquella provincia no tienen jurisdiccion alguna sobre el asunto ni sobre las personas que litigan, volveria á la cámara de Buenos Aires, y tendríamos todo este monton de dificultades, por la sancion de este artículo, que no consulta absolutamente nada, en el sentido de los verdaderos intereses públicos.

A mi me parece que debiera suprimirse.

Sr. Pelligrini—Pido la palabra. En esta cuestion soy radical: es una especie de profesion de fé que yo he hecho desde que, por mi profesion de abogado, conozco los procesos llevados ante la curia. Es como un juramento que en cierta época hice, de que el día que pudiera arrancar á esa jurisdiccion las causas de divorcio y de nulidad de matrimonio que producen efectos civiles en mi país, alzaría mi voz para pedir que pasaran todos esos expedientes, todas esas causas á la jurisdiccion civil. Y si algunas de esas curias no quisieran que se hiciera esto, tal vez seria por temor de que se descubriera, en el procedimiento de esas causas, verdaderos horrores.

Y cuando digo esto es por que tengo la prueba.

Existe un folleto que contiene el relato de

una causa célebre ventilada ante la curia, en la que el procedimiento ha sido arbitrario; por que cuando á la curia se le antoja seguir un procedimiento determinado, lo sigue; cuando quiere favorecer á una parte, lo hace, del propio modo que cuando quiere atacarla ó perjudicarla, la ataca ó la perjudica.

¿Qué sucede en el estado de prueba?

En los casos de divorcio, por ejemplo, la prueba se produce secretamente; procedimiento que es contrario á nuestras leyes civiles y al espíritu y á la esencia del proyecto que discutimos.

Hay casos en que la curia muestra la prueba á la parte que le conviene, porque, señor presidente, la verdad es que en muchos casos hay una parte mas favorecida que otra y que cuenta con mas simpatias en la curia.

Es por esa razon que yo pido que todas las causas que actualmente tramitan ante la curia pasen á la jurisdiccion civil, que tiene una ley única y un procedimiento formal para todos los asuntos en el cual penetran los rayos de luz que se proyectan hasta sobre los mas mínimos detalles, sin reserva para ninguna de las partes.

Conocido es el ruidoso y sensacional proceso que se ha seguido ante la curia contra una mujer que la ciencia declaró virgen y que la curia, á pesar de la opinion de ilustradimos peritos en la materia, sostuvo que no lo era y la declaró delincuente, arrojándole así una mancha bochornosa contra su honor; pero felizmente la sociedad de Buenos Aires dijo: No! Se reconoció que la ciencia tiene mas autoridad que la curia; y á esa mujer que se le ha declarado delincuente, la sociedad la ampara con su delito y la reconoce como intachable, como un ejemplo de virtud entre nosotros.

Como digo, existe un folleto en el que está estampado esto y que será un baldon para la curia.

Y en cuestiones de procedimientos, señor presidente, debe buscarse mayores garantías para las partes litigantes; debe buscarse que la prueba siempre sea pública cuando se trate de testigos, puesto que la parte contraria no viene á saber absolutamente nada de lo que está pasando hasta terminada la prueba de los testigos. Y sobre la base de la declaracion de los testigos se condena ese matrimonio al divorcio.

Es por esto, y como no contrario en nada á la legislacion civil, puesto que el código civil dice que en materia de procedimientos no hay derechos adquiridos, que puede pasar todo el procedimiento á la nueva ley.

En cuanto á la dificultad que encontraba el señor ministro, de que una causa vaya en apelacion al Paraná, quiere decir que volverá

Octubre 25 de 1888

CAMARA DE DIPUTADOS

16a Sesión de próroga

al sitio donde se originó, donde están los contrayentes; y esa será la jurisdicción civil que deba entender en adelante en el proceso.

Sr. Molina—Pido la palabra.

Yo voy á votar por la supresion del artículo, porque en todo en él no hay una cuestión de principios comprometida, por lo menos en el orden en que ha girado esta discusion.

Creo que cuando la cámara ha llegado á establecer el matrimonio civil, de una manera radical, modificando la forma menos acentuada que habia proyectado el poder ejecutivo, una vez que hemos sancionado una penalidad para el sacerdote que consagre una union sin el certificado previo de haberse celebrado el acto por la autoridad civil, los fines de esta ley, que es una ley de trascendencia y para el porvenir, estan conseguidos. Y yo digo entonces: si cualquiera dificultad se presentara, dificultad de detalle, para que inmediatamente se aplicaran las disposiciones de esta ley á las causas pendientes, que han surtido de la antigua legislacion, que estan radicadas ante los antiguos tribunales, ¿por qué habrianos de sacrificar esos intereses, que son siempre respetables, para llevar hasta su última conclusion el proyecto que hemos sancionado. Haciendo: Inmediatamente se pondrá en vigencia, inmediatamente se desprenderán los tribunales de las causas pendientes?

Yo tambien sé, señor, que en la curia ha habido abusos y que los hay; pero aqui es oportuno el proverbio: «En todas partes se cuecen habas». Aun cuando no sea muy parlamentario ni de buen gusto, este proverbio es muy cierto, tratándose de los tribunales de la capital como de los tribunales de toda la República.

Causa conozco yo en que los herederos no han recibido la quinta parte de lo que han recibido los abogados. Causa conozco tambien que hace mas de treinta años está pendiente de sentencia en los tribunales civiles. No exagero: me ha tocado intervenir una vez en una causa iniciada antes de que yo naciera.

Bien, señor, si la curia ha abusado en algunas ocasiones, esto no era sino una razon para haber corregido, con los medios legales, esos abusos, en los casos ocurrentes.

Pero el señor diputado tambien nos decia que es muy atrasado el secreto de la prueba.

Seguramente lo es; pero aqui encuentro yo una dificultad para que estas causas no fenezcan alli donde están iniciadas, y es esta: que siendo la prueba secreta, y pudiendo haber sido abandonada á la mitad ó á los dos tercios del término probatorio, resultará que con la innovacion introduciendo la prueba

pública habrá muchas veces que retroceder hasta el principio de la causa.

Estas son cosas que no afectan en nada el principio liberal y que nosotros debemos tener en cuenta cuando tratamos de los intereses particulares.

Sr. Pellegrini—El divorcio que se pronuncie en adelante, aun que sea en causas pendientes ante la jurisdicción eclesiástica, va á producir efectos civiles. De esta manera nosotros vamos á dar efectos civiles á los procedimientos de los cánones puesto que es sabido que la curia aplica los cánones en lo que le parece y aplica la ley de justicia federal en lo que le conviene.

Así es que nosotros, una vez que la curia nos diga: Yo he declarado el divorcio; hagan vds. cumplir la separacion de bienes,—nosotros tendremos que dar cumplimiento á las leyes. Y querrá decir que habrá una jurisdicción civil que, en un caso, aplique la ley canónica, y en otro, la ley civil.

Así es que vamos á tener dos jurisdicciones, dos leyes de procedimientos, una canónica y otra civil, que se aplicarán en la República al mismo tiempo.

Y esa dificultad, de que hablaba el señor diputado, de abrir la prueba, no significa nada, puesto que, desde el momento que es la prueba secreta, tiene elementos sobrados para abrir la prueba nuevamente.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pido la palabra.

Cuando por primera vez el congreso dotó á la República de la institución de la justicia federal, se produjo un caso semejante.

Todas las causas del fuero federal se seguian ante los tribunales de provincia, ya fueran del fuero federal por razon de la materia ó por razon de las personas.

El congreso sancionó la ley de justicia federal y declaró, espresamente, que todas las causas del fuero federal pendientes ante los tribunales de provincia se terminarian ante ellos.

De manera que el ejemplo que pone el señor diputado, y que tanto le asusta, de que puede seguirse una causa de divorcio, iniciada ya, ante la curia eclesiástica, mientras una causa de divorcio iniciada con posterioridad á la ley se siga ante el juez civil, no tendrá nada de extraño.

El hecho se ha producido ya. Sé tramitaban causas de la jurisdicción federal ante los tribunales de provincia, que tienen su ley de procedimiento, y se tramitaban despues causas análogas en el orden federal...

Sr. Pellegrini—Pero esas eran leyes

Octubre 25 de 1888

CÁMARA DE DIPUTADOS

16a Sesión de próroga

argentinas; no eran leyes de Roma, no eran leyes de origen extranjero, como los cánones.

Sr. Molina.—Los cánones, en cuanto están adoptados por la legislación actual, son también leyes nacionales.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—El señor diputado por la capital ha partido de un error al creer que los cánones son leyes extranjeras.

Ellos no rigen en la República sino con el *exequatur* que concede el poder ejecutivo ó, en su caso, el congreso. Y cuando el caso llega, esos cánones, que sin razón alguna el señor diputado califica de leyes extranjeras, son leyes argentinas, están incorporadas á la legislación argentina, y esos tribunales eclesiásticos son también tribunales argentinos.

Por lo demás, vamos á esponernos con esto á doscientas mil cuestiones de competencia; vamos á vernos hasta en la dificultad seria de que un tribunal de provincia no acepte estas causas. ¿Por qué? Porque el congreso no puede legislar sobre jurisdicciones de provincia.

Pero pregunto: ¿cuál es el fundamento en que se apoya el señor diputado? Que una causa que ha citado, haya sido mal fallada por la curia de Buenos Aires?

Pero el señor diputado lo por la capital, doctor Molina, ha citado varias causas de otro género, y yo podría citar otras, que asustarían á la cámara, seguidas aquí y falladas por los tribunales de la capital de la República.

Yo podría decir que treientos setenta y un habitantes de este país han sido injustamente procesados.

Podría decir que ciento cuarenta y tantos individuos han sufrido, el año pasado, mayor pena que la que la ley les imponía, ¿Por qué? Porque los procesos no se han seguido con la prontitud con que debieron seguirse.

Podría citar un caso en que he intervenido como juez, y en el cual se ejecutaba á una infeliz muger por cobro de exeso de honorarios.

La herencia que ella había recibido había sido consumida por abogados y procuradores, y la ejecución que se le seguía era para que pagara de su bolsillo el exceso de gastos que había habido.

Sr. Pellegrini.—¿Pero tenemos jurisdicción sobre los jueces eclesiásticos?

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—¿Y no

tienen los jueces civiles los recursos de fuerza sobre los tribunales eclesiásticos?

En la ley orgánica de los tribunales de la nación están legislados estos recursos que estaban legislados también por las leyes españolas.

Le pido al señor diputado que me salve esta dificultad.

¿Qué haría mañana el congreso si un juez de Córdoba ó de Santiago dijera: no recibo esta causa; el congreso federal no tiene facultad para legislar sobre mi jurisdicción?

Sr. Pellegrini.—Y los recursos de fuerza ¿se entablan ante la jurisdicción federal?

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Sí, señor.

Sr. Pellegrini.—Por mandato ¿de qué ley?

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Por la ley nacional.

Sr. Pellegrini.—Ah! por la ley nacional. Luego, entonces, tenemos el derecho de dictar una ley análoga.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—No tenemos derecho, señor.

El congreso no puede legislar sobre la jurisdicción del juez provincial de la Rioja ni del de Santiago. Sobre la de los tribunales de la capital, sí: puede legislar ampliamente.

Estas son verdades notorias para todo el que ha manoseado un poco esta materia.

Nos espondríamos á tremendos desaires: un juez podría decirnos: yo no acepto esta causa; yo no entrego tal otra, porque soy competente para resolverla: voy á una contienda de competencia: ¿Y con qué objeto? ¿Qué gana la ley, la libertad, el liberalismo? Nada absolutamente!

Esta ley es una gran honra para el parlamento de mi patria, y ¿por qué hemos de ponerle estos lunares? ¿Por qué al señor diputado le ha ido mal en un pleito ante la curia? Yo también he tenido causas ante la curia de Córdoba, y siempre he visto sentencias buenas,

Sr. Pellegrini.—Ami no me ha ido mal.

Sr. Mansilla.—A la parte, le ha ido mal.

Sr. Pellegrini.—Ha sido á un distinguido abogado de Buenos Aires.

Octubre 25 de 1888

CÁMARA DE DIPUTADOS

16ª Sesión de próroga

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Con eso puede hacer impresion en las personas que escuchan; pero no ha de contestarme una sola de mis observaciones fundamentales, científicas en el terreno de la legislación.

Yo creo, pues, que el congreso, sin lastimar en nada el liberalismo de la ley, debería suprimir el artículo.

—Se aprueba el despacho de la mayoría de la comisión, quedando así rechazado el artículo 125.

—Se aprueba el resto del proyecto.

—A indicación de varios señores diputados, se levanta la sesión á las 5 y 30 p. m.